

Plenaria del Senado de la República
09 de Diciembre de 2020

CONSTANCIA

El paso del huracán IOTA el pasado 16 de noviembre devastó las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El 98% de la infraestructura de Providencia quedó destruida y esto impactó gravemente en el orden económico y social de sus habitantes. En el país, nunca habíamos visto un huracán de esta magnitud y definitivamente no estábamos preparados.

El Gobierno ha hecho una puesta en escena magnífica para televisión, en la que se ve como protagonista de la atención del desastre al Presidente Iván Duque y a la Unidad de Gestión del Riesgo. No obstante, la realidad detrás de las cámaras es otra. Las comunidades del archipiélago están denunciando que la Unidad de Gestión del Riesgo está focalizando las ayudas en un centro de acopio, donde la burocracia y los trámites innecesarios no están sintonizados con el estado de emergencia. Los isleños denuncian que las ayudas no están llegando a quienes las necesitan y están guardadas en una bodega. Se conoce que el territorio de San Andrés también ha sido afectado y a la fecha no han recibido las ayudas humanitarias requeridas.

Además, los pobladores expresan su preocupación por la propagación de enfermedades, especialmente por los contagios de COVID-19. Señalan que no se han realizado pruebas en las últimas semanas, que están durmiendo en carpas que no son impermeables y que no cumple con las medidas de bioseguridad. Están a la intemperie y bajo la lluvia, lo que ha impactado la salud de niñas, niños y personas de la tercera edad.

La emergencia climática en Colombia es una realidad. Desastres como el del departamento de San Andrés, o como los de Chocó, Antioquia y Norte de Santander, dejan en evidencia el abandono y la falta de prevención del Estado colombiano. Es urgente ejecutar acciones que protejan y brinden garantías a las víctimas de esta emergencia.

Firma,



ANTONIO SANGUINO PÁEZ
Senador de la República